**Informe sombra sobre mujeres rurales; mujeres indígenas, mujeres afro-ecuatorianas y mujeres montubias**

[[1]](#footnote-1)





***Con el apoyo de:***



**Septiembre de 2020**

**Actualizado a 2021**

***Agradecemos al Fondo Ágil y a ONU Mujeres por su apoyo en la realización del presente informe.***

**MUJERES RURALES, MUJERES INDÍGENAS, MUJERES AFRODESCENDIENTES Y MUJERES** **MONTUBIAS**[[2]](#footnote-2)

*Párrafos 10 y 11 de la Lista de Cuestiones*

***Mujeres rurales***

1. Las mujeres rurales viven una doble invisibilización y discriminación por ser campesinas y por ser mujeres. A ello se suma la homogeneización, que no considera la diversidad de las mujeres que trabajan y viven del campo.
2. Por ejemplo, las mujeres campesinas en la costa ecuatoriana y manabita han sido caracterizadas como dedicadas a la agricultura; sin embargo, esta no es una afirmación precisa. Si bien existen mujeres que se dedican exclusivamente a la agricultura, hay otras que lo hacen parcialmente, y también hay mujeres que realizan otras actividades económicas. Muchas mujeres en esta zona se dedican a la artesanía con paja toquilla y otras actividades artesanales, lo que no es reconocido ni por el Estado ni por la sociedad.
3. Las mujeres rurales desempeñan múltiples actividades económicas para sostener a sus familias y comunidades, ya que la mayoría de las mujeres son responsables de su hogar. Esto tampoco lo menciona el Estado.
4. Además, no se cumple con el derecho a la propiedad, uso y control de la tierra y los territorios, y el acceso a los servicios básicos en las zonas rurales es limitado. Adicionalmente, persisten creencias culturales sexistas y falta de conocimiento y empoderamiento por parte de las mujeres para reconocer a un territorio como propio, tal como lo establece la legislación sobre matrimonio.
5. La violencia de género está normalizada en el área rural y el índice de incesto es bastante alto en las zonas rurales. Ha habido un incremento de la violencia intrafamiliar en zonas rurales debido a la emergencia sanitaria por COVID19. En la costa, las mujeres rurales sienten que están desprotegidas y abandonadas, incluso por las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, las mujeres montubias siguen luchando por su reconocimiento, por ejemplo, en lugares como Manabí.
6. Es preciso indicar que, de acuerdo con lo manifestado por mujeres rurales, la producción agropecuaria es muy sacrificada. Sus productos alimentan a las ciudades, pero reciben bajos precios. Las comunidades y sus gobiernos comunitarias autónomos y de manera particular las mujeres, somos las que garantizamos la vida mediante alimentación autónomas o la soberanía alimentaria en el Ecuador. Según datos de FAO, el 75% de la comida que llega a la boca no proviene de grandes explotaciones agrícolas, sino de las pequeñas o de la agricultura familiar. En el caso ecuatoriano es el 60% de los pequeños proveen la alimentación en el país.

***Apoyo y participación de las mujeres campesinas***

1. Las mujeres campesinas requieren de mayor apoyo y representación, ser escuchadas y promovidas en sus derechos de participación ciudadana y política. Además, es importante resaltar la importancia de que el Estado implemente y continúe con los programas de asistencia a favor de las productoras campesinas.
2. Existe preocupación debido a la inexistencia de incentivos para las redes agroecológicas, recalcando que el Ministerio de Agricultura no ha desarrollado una propuesta de fortalecimiento a la pequeña producción, en donde existe una alta participación de las mujeres en la producción de alimentos para consumo familiar y también para comercialización a gran escala.
3. El Estado ha realizado actos públicos de promoción y diálogo con las mujeres campesinas, sin antes incentivar, proponer y ejecutar políticas reales y efectivas de empoderamiento a favor de las mujeres rurales que son productoras.
4. De igual forma, la posibilidad de obtener créditos y microcréditos agropecuarios en entidades financieras públicas es escasa, puesto que los requisitos son difíciles de cumplir para las mujeres campesinas, quienes no cuentan con la debida información, asesoramiento y acompañamiento en los trámites, lo que las desincentiva. Generalmente, se promueve el endeudamiento individual sin conocimiento previo de los posibles emprendimientos colectivos en articulación con programas gubernamentales o interinstitucionales.

***Seguridad social y protección laboral de mujeres rurales campesinas***

1. En el Ecuador hay un persistente y continuo debilitamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) provocado por los gobiernos de turno, que conlleva la falta de prestaciones en los diversos ámbitos, tanto para el Seguro Campesino como para el Seguro General. Ha sido igualmente incorporado un sistema ineficaz para la protección de salud de las trabajadoras rurales, quienes además de soportar a veces una triple carga discriminatoria, no cuentan con políticas eficaces para garantizar su bienestar físico, psicológico, laboral y social. Además, la deuda del gobierno con el IESS asciende a 6.000 millones de dólares. Esta precarización del IESS y el Seguro Campesino amenaza la estabilidad del tejido laboral, social y económico de manera particular de las mujeres rurales/campesinas.
2. Por un lado, el gobierno otorga un sistema subsidiado tanto para las amas de casa cuanto para el campesinado. Sin embargo, las mujeres campesinas no son consideradas como amas de casa bajo la definición legal, pues dicha definición implica que la mujer se dedique de manera exclusiva a trabajo no remunerado del hogar, mientras las mujeres campesinas, por lo general, no solamente cargan la responsabilidad de realizar estas tareas, sino que también tienen una actividad económica adicional: la agricultura o la ganadería; tareas que se realizan, ya sea como parte del núcleo familiar, o por cuenta propia, pues la familia campesina suele requerir ingresos adicionales para subsistir.
3. Por otro lado, el Seguro Social Campesino solamente otorga beneficios completos de seguridad social al jefe del hogar. El o la cónyuge y sus dependientes gozan de los beneficios de salud y maternidad, pero solamente al jefe de familia se le protege contra las contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad (Ley de Seguridad Social, Art. 3). Si bien es cierto que el acceso a la salud es probablemente el beneficio más importante, las mujeres campesinas carecen de alternativas para acceder a la totalidad de los derechos que derivan de la seguridad social: (i) por ser dependientes y, (ii) por estar excluidas de la definición de amas de casa.
4. Las mujeres campesinas tienen largas jornadas de trabajo, sin embargo, no son reconocidas por como sujetas de protección ante el Seguro Social, sean estas actividades remuneradas o no. Con esta consideración, no se garantiza a las mujeres campesinas la totalidad de los beneficios de la seguridad social, lo que es claramente discriminatorio en comparación con el jefe del hogar y el seguro de las amas de casa.

***Mujeres indígenas***

1. En Ecuador existen 14 nacionalidades, 19 pueblos y 12 idiomas propios. Ecuador es un país pluricultural y plurinacional, según la Constitución de 2008. En la Carta Magna también se recoge el derecho a la consulta previa, libre e informada, en las tierras comunales y ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas. No obstante, en la práctica no se desarrollan procesos de consulta previa, menos aún con enfoque de género. Los proyectos insertados sin previo aviso en las comunidades afectan la vida de las mujeres. La redistribución de las tierras y del agua en beneficio de las mujeres no se materializa.
2. El Estado ecuatoriano, en su intento de dinamizar la matriz productiva y la generación de capital e ingreso extractivo hidrocarburífero y minero, ha faltado a su responsabilidad y obligaciones para con las comunidades de los pueblos y nacionalidades.
3. Se observa, además, que varias multinacionales extranjeras y nacionales de carácter minero, petrolero, maderero y de agronegocios, han ingresado bajo la venia de las autoridades gubernamentales, agravando y amenazando la integridad territorial, cultural y socioeconómica de los pueblos y nacionalidades que por largos períodos han enfrentado problemas socioambientales violatorios de sus derechos colectivos. Los intereses económicos no tendrían que prevalecer, o peor aún, violar las leyes nacionales e internacionales de protección de estos grupos (por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT). El Estado tiene la obligación de crear, desarrollar y administrar procesos de socialización, participación, y consulta con los pueblos y nacionalidades, incluyendo a las mujeres de estos colectivos como parte del núcleo de integración social y económica.
4. En la provincia de Cotopaxi (áreas de Pangua y Sigchos), se reporta una situación preocupante por la explotación minera a gran escala, al haberse concesionado los derechos de uso de la tierra a mineras que a su vez promueven la dependencia y la explotación ambiental, afectando a las comunidades locales. Así también, las mujeres y comunidades de otras zonas de la provincia están siendo afectadas por los monocultivos de brócoli, particularmente las mujeres indígenas que no han logrado acceder a estudios superiores y se han dedicado a trabajar la tierra y vivir de ella.
5. La lucha anti-extractivista de las mujeres tiene una trayectoria importante. Son las mujeres las que, tomando el ejemplo de antiguas luchas sociales, han liderado, con una importante presencia, movilizaciones contra la explotación desmedida e inconstitucional de recursos mineros en las tierras donde ellas habitan. Las mujeres señalan con mucha preocupación que el Estado y el sector privado extractivo no reconocen los derechos de las mujeres indígenas a un ambiente sano que les permita estar en pleno contacto con la tierra y la naturaleza. Además, se les niega el derecho a participar en las decisiones estatales en cuanto a la explotación de la tierra y los ríos.
6. Hacia 2020, las mujeres de los pueblos y nacionalidades del Ecuador siguen sin ser consultadas ni beneficiadas por los proyectos de explotación de recursos naturales. Varias nacionalidades, comunidades y pueblos indígenas del Ecuador han exigido al Estado demostrar si los procesos de consulta libre, previa e informada se realizan; hasta la fecha, el Estado ha sido incapaz de probar si estos procesos se están llevando a cabo de acuerdo con el derecho nacional e internacional, en cumplimiento de sus obligaciones legales, sociales y de participación. Al mismo tiempo, el Estado, no ha demostrado cuáles son los beneficios que las multinacionales de explotación de los recursos naturales han traído a las mujeres de los pueblos y nacionalidades.
7. Si tomamos como base el Informe Estatal del Ecuador para el Comité CEDAW de 2020, no se logra identificar que el Estado esté cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, solamente se menciona la articulación legislativa de la consulta libre, previa e informada. El Estado no informa sobre procesos extractivos y económicos donde las mujeres pertenecientes a colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias hayan sido consultadas e incluidas para las etapas de concesión o negociación.
8. En la provincia de Morona Santiago, agrupaciones indígenas de mujeres alegan que las empresas mineras entran a sus territorios ofreciendo regalías que se distribuyen y administran a través del Estado. Sin embargo, el Estado no logra probar que estas regalías amparadas por la Ley de Minas se están distribuyendo equitativamente y de una manera que promueva la protección de la identidad, cultura y territorio donde las mujeres se desarrollan con sus familias y comunidades, como es el caso de la Comunidad de Nankits.
9. Además, se genera una cultura de “paternalismo” por parte de las empresas, con aval gubernamental. De esta forma, se establecen una suerte de acuerdos con las poblaciones, aunque estas no cuentan con información suficiente sobre las consecuencias de la intervención de las empresas extractivas. También se dan casos de hostigamiento y ofrecimientos ilícitos por parte de las empresas hacia las mujeres y otros miembros de los pueblos y nacionalidades.
10. Un ejemplo conciso es en Morona Santiago, donde las empresas mineras ingresan a sus territorios con chantajes o dádivas como arroz, pollo u ofertas de acceso a internet. En ocasiones las comunidades aceptan la situación sin posibilidades de desafiar patrones de explotación disfrazados de ayuda que crean dependencia y reproducen modos coloniales de relación: “No necesitamos que nos den, necesitamos que se nos haga responsables ante esta situación. Incluso algunos dirigentes se prestan para esto ofreciendo estas ‘migajas’. Las empresas se reúnen con los dirigentes o autoridades y llegan a ‘consensos’ que dañan a las comunidades” (Dirigenta de la comunidad, comunicación personal, junio de 2020).
11. Las lideresas indígenas señalan ejemplos como el de Cuenca, provincia del Azuay, donde dos proyectos de minería metálica concesionados por el gobierno y definidos como estratégicos (Loma Larga en Kimsakocha y Río Blanco en Molleturo). Estos proyectos se encuentran ubicados en los páramos de El Cajas, zona protegida por sus ecosistemas que abastecen de agua a las comunidades urbanas y rurales del cantón. Se muestra de una manera preocupante que las comunidades indígenas y principalmente las mujeres, están soportando no solamente el asedio de las empresas mineras (canadienses y chinas) que, de común acuerdo con el gobierno, pretenden imponer la megaminería por encima de la vida y la salud, promoviendo, a su vez, una estructura patriarcal de dependencia, sin la legitimidad ni participación de las mujeres que se requiere en estos procesos.
12. Se reitera de manera contundente que, al igual que en otras regiones y provincias del Ecuador, en Azuay no se ha respetado la consulta libre, previa e informada. Adicionalmente, los resultados que se han obtenido en Consultas Populares, los informes de Contraloría sobre las concesiones, las sentencias judiciales, y el posicionamiento de los GAD locales, contienen serias irregularidades que podrían derivar en que el Estado ecuatoriano es responsable de concesiones mineras inconstitucionales y contrarias a las obligaciones del derecho internacional.
13. Se ha visto que las realidades que viven en especial las mujeres indígenas en cuanto a salud, educación y violencia, son condiciones precarias y se logra evidenciar que no ha habido mejoras. El Estado no crea políticas públicas en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Un ejemplo es Chontapunta, donde nadie se responsabiliza de la contaminación del río, lo que afecta a los cultivos cuando llueve y eso evidentemente afecta a la vida de las mujeres indígenas.
14. Es importante resaltar el rol de las mujeres en la defensa de los territorios y el agua, siendo ellas la que han sostenido los procesos de resistencia. A la vez, han sido criminalizadas, estigmatizadas y envueltas en procesos de gran conflictividad que no les permiten desarrollar sus actividades agrícolas y artesanales, perjudicando sus medios de vida y afectando gravemente su estado anímico y psicológico, tanto de ellas como de sus familias. Ante la inacción del Estado, se ha incrementado la división y el enfrentamiento en las comunidades, haciéndolas perder su paz y armonía.
15. En este sentido, el gobierno promueve y realiza asambleas sobre temas no relacionados, en las que se toman fotos a las personas alzando las manos aleatoriamente, las cuales se utilizan como supuesta evidencia de que se aceptaron las prácticas mineras.
16. Las mujeres siempre han estado al frente de las luchas indígenas, tal como lo evidencian los paros nacionales realizados desde 1990, incluyendo el paro de 2019. No obstante, las mujeres indígenas aún no tienen poder de decisión. Hubo un caso en la región costa, donde en una reunión no podían hablar las mujeres sobre su situación ante la presencia de un hombre. Ellas no se daban cuenta del error, lo tomaban como una cuestión ancestral, donde hay que respetar a la cabeza del hogar, que es el hombre.
17. En el caso de la comunidad ancestral La Toglla, ha habido problemas, juicios, persecuciones inclusive muertes, causadas por invasores con el fin de robar las tierras ancestrales colectivas (Dirigenta de la comunidad, comunicación personal, junio, 2020).

***Justicia ordinaria y comunitaria***

1. Pese a que la justicia comunitaria indígena está reconocida en la Constitución, el Estado la desacredita. Existen muchos procedimientos del Estado ante la justicia indígena, en los que no se respeta la normativa constitucional ni la legislación secundaria y se persigue a personas que practican la justicia indígena. La ley es clara: cuando se tiene un requerimiento de declinación de competencia se debe atender dicha solicitud, pero esto no ocurre.
2. Los jueces ordinarios solían declinar competencia para las contravenciones que ocurrían en territorios indígenas y, con esto, abrían la posibilidad de que la justicia indígena actuara. Desde 2018 y a partir de la resolución “La Cocha” (2014) de la Corte Constitucional (que define a la justicia indígena como un acto ritual, y no de justicia), se ha dejado de declinar la competencia. Además, algunos pueblos y nacionalidades acataban la disposición de que la justicia indígena podía actuar solo en casos de contravención, otros, en cambio defendían su derecho de actuar también en caso de delitos.
3. Expertas en la materia, señalan que antes de la sentencia de La Cocha, alrededor del 30% de los jueces declinaban competencia, pero, desde 2014, solo se declina alrededor del 10% de las veces. A su vez, los jueces ordinarios señalan que la declinación solamente se aplica a los casos civiles y no a temas penales. No obstante, inclusive en casos civiles, existen jueces ordinarios que se declaran competentes cuando ya se ha aplicado la JI. Por ejemplo, se ha dado el caso de un juez que continúa el caso de divorcio cuando la pareja ya se ha reconciliado (se aplicó JI) y no aceptó la declinación de competencia, invirtiendo tiempo y recursos estatales en un caso ya resuelto.
4. Las limitaciones que tienen las mujeres en la toma de decisiones de la JI son producidas por prácticas patriarcales dentro de la misma. Por ejemplo, hay casos de violación o violencia hacia las mujeres en los que la resolución de la justicia indígena no es favorable para las mujeres. Así, hubo un caso de femicidio de una mujer indígena en Saraguro, el cual no tuvo difusión ni apoyo del gobierno. Las mujeres siguen siendo maltratadas por los hombres líderes de sus propias comunidades.
5. Entonces, ninguna de las dos justicias, ni la ordinaria ni la comunitaria, garantizan el derecho a la vida de las mujeres. Las mujeres callan los casos de violencia por la inefectividad del sistema de justicia ordinario. Adicionalmente, el sistema de justicia ordinario no posee un sistema para receptar denuncias de mujeres indígenas que considere su contexto sociocultural.
6. Además de la falta de voluntad política de entidades como el Consejo de la Judicatura, existe desconocimiento y corrupción por parte de las personas que operan en el sistema judicial ordinario. Por ejemplo, hay casos en que la herencia de las tierras se entrega a la descendencia de los hombres y se limita el acceso a la propiedad de las tierras por parte de la justicia indígena.
7. También existen procesos de criminalización hacia quienes practican JI. En 2015, se iniciaron procesos desde la justicia ordinaria por “secuestro” a muchas personas que llegaron a ejercer la justicia indígena. Para que se reconozca a la justicia indígena, debe reconocerse la existencia de un sistema de derecho indígena.
8. La justicia indígena en cada pueblo, comunidad y nacionalidad varía, no tiene los mismos estatutos, por lo que la situación de los derechos de las mujeres en cada comunidad también varía.
9. Además, en las comunidades de los pueblos y nacionalidades los cabildos o gobiernos comunitarios intervienen en diversas situaciones familiares, pero las mujeres sientes que no se hace verdadera justicia. Los cabildos son solo varones, los defienden a los hombres, la comunidad igual, hasta las mujeres defienden a los hombres.

**Recomendaciones**

**A todas las funciones del Estado:**

* Garantizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y pueblos ancestrales, contando con una activa participación de las mujeres sobre las intervenciones en sus territorios.
* Adoptar una mirada diferenciada en las políticas públicas para fortalecer a las mujeres rurales en su diversidad.

**Al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca:**

* Diseñar e implementar programas de fomento de las prácticas y producción agroecológica, el derecho a la tierra, el acceso a los territorios de manera soberana y directa por el beneficio armónico de las mujeres los pueblos y comunidades ancestrales.
* Diseñar e implementar mecanismos de acción positiva para las mujeres indígenas y las mujeres rurales cuyos derechos laborales han sido vulnerados por las empresas agroexportadoras (floricultoras y frutícolas no tradicionales) en el marco de la crisis COVID-19.
* Posicionar la soberanía alimentaria como apuesta de las mujeres campesinas y de sectores populares.

**Al Ministerio de Inclusión Económica y Social:**

* Incrementar el número de servicios de cuidado infantil, de personas adultas mayores y personas con discapacidad en convenio con los GADs municipales y parroquiales como mecanismo de apoyo directo a las mujeres, las familias y las comunidades campesinas, indígenas y afroecuatorianas en el marco de la recuperación pospandemia.

**Al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda:**

* Proporcionar vivienda alternativa y medios de vida adecuados a las mujeres afectadas y asegurarse de que las empresas públicas y privadas que ejecuten proyectos de explotación de recursos naturales paguen una indemnización suficiente a las mujeres que viven en territorios y zonas en que tengan lugar esos proyectos.

**Al Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades:**

* Fortalecer las organizaciones de mujeres comunitarias y los liderazgos de las dirigentas indígenas, quienes velan por los derechos de las mujeres indígenas y contribuyen al fortalecimiento de los derechos de las mujeres de todo el país.
* Promover y apoyar proyectos que convoquen a las mujeres del área rural a organizarse para su empoderamiento político, así como proyectos de fomento del empoderamiento y autonomía económica y fortalecimiento de su autoestima; incluyendo la prevención y atención de la violencia de género.
* Posicionar los derechos de las mujeres rurales e indígenas, incluidos los derechos laborales y el derecho a una vida libre de violencia, visibilizando que las crisis económica, social y sanitaria, las afectan en mayor medida.

**Al Consejo de la Judicatura:**

* Garantizar el apoyo técnico y político para desarrollar un diálogo intercultural sostenido entre justicia indígena y justicia ordinaria.
* Cumplir con los mandatos de la Constitución en cuanto a fortalecer la Función Jurisdiccional de las autoridades indígenas.
* Capacitar a jueces y juezas del sistema ordinario en temas de pluralismo jurídico.

**A la Asamblea Nacional:**

* Reformar la Ley de soberanía alimentaria y que se garanticen precios justos a productos agropecuarios de los pequeños productores de la agricultura familiar, campesina y comunitaria.
* Reforma a la ley de tierras en los artículos referentes al acceso, la titulación, transferencia de dominio para las mujeres independientemente de su estado civil en cuanto a la herencia se refiere. Los requisitos actuales son muy engorrosos para las mujeres en particular para las mujeres casadas o unidas que buscan la figura de compra-venta sobre todo en la transferencia de dominio por herencia.
* Construcción participativa y aprobación de una ley de comunas donde se incluyan los siguientes temas: elección de autoridades comunitarias de forma paritariamente alternada y secuencial. Una de sus funciones será prevenir y erradicar de la violencia contra las mujeres. No se podrá dejar en la impunidad estos casos, menos aun cuando un exista un femicidio.

***Mujeres afroecuatorianas***

1. La Constitución de 2008 reconoce a las personas afrodescendientes como un pueblo con derechos colectivos; en particular, en el Capítulo 4 (Artículos 56 y 57). El artículo 57 de la Constitución describe los derechos que los diversos pueblos del Ecuador pueden disfrutar con respecto a las tierras ancestrales. Sin embargo, al igual que los pueblos indígenas, los pueblos afroecuatorianos han sido objeto de abusos de derechos humanos de larga data, sin tener en cuenta su cosmovisión y el uso de sus tierras ancestrales.
2. Las personas afroecuatorianas se encuentran en todo el territorio nacional, pero residen en asentamientos históricamente significativos, por ejemplo, en la cuenca del río Mira, en el valle del Chota y en la provincia de Esmeraldas desde la época de la Colonia. No obstante, ha habido migraciones masivas a las ciudades más grandes como Guayaquil y Quito, así como a otras regiones y provincias. En algunos casos, la migración se produce como consecuencia de los proyectos agrícolas multinacionales en territorios ancestrales. Muchas mujeres migran para trabajar para familias blanco-mestizas, generalmente sin remuneración, a cambio de vivienda y alimentación.
3. Las afroecuatorianas constituyen el 49% de la población afrodescendiente en el país y son particularmente vulnerables a estos abusos y explotación debido a la interseccionalidad de género, raza y posición social dentro de la sociedad.
4. La comuna de Playa de Oro, ubicada en la provincia de Esmeraldas (una de las regiones con mayor biodiversidad del país), alberga a unas 80 familias afrodescendientes (alrededor de 300 residentes) que viven bajo la amenaza de la tala de bosques, la minería y las plantaciones de palma. Es una zona geoestratégica debido a los diversos recursos naturales que alberga, y por limitar con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.
5. En la provincia de Esmeraldas, el gobierno continúa otorgando permisos a las multinacionales para extraer recursos naturales en comunidades y territorios; se han entregado miles de hectáreas de tierras ancestrales a las industrias extractivas. Esta imposición amenaza la salud y los medios de vida de la población afrodescendiente.
6. Grupos de mujeres afroecuatorianas han denunciado reiteradamente impactos ambientales y físicos causados por los proyectos mineros, como la contaminación del agua, lo que ha provocado escasez de agua y, en ocasiones, problemas de salud reproductiva que pueden provocar infertilidad. Esta es una forma abierta de racismo ambiental con contaminación sistemática de suministros de agua y del medio ambiente, sumada a la intimidación e incluso desplazamiento de las comunidades.
7. Las mujeres afroecuatorianas han sido discriminadas y explotadas cuando trabajan en la industria de la palma; por ejemplo, reciben un salario menor por realizar un trabajo similar al de los hombres. Estas mujeres son vulnerables a la explotación laboral, incluidas las violaciones de los términos de empleo, el pago insuficiente de los salarios, las deducciones salariales y el abuso verbal, físico y sexual.
8. Las afroecuatorianas están cada vez más amenazadas por los gobiernos y las empresas privadas que desean beneficiarse de los recursos encontrados en, o bajo, sus tierras. En la provincia de Esmeraldas, particularmente en los distritos de San Lorenzo y Eloy Alfaro, debido a la violencia y los efectos adversos de la explotación de los recursos naturales, muchas mujeres han recurrido al trabajo sexual para ganarse la vida, debido a la falta de otras oportunidades económicas.
9. Hay una respuesta insuficiente del Estado para realizar el control de las empresas o para abordar los problemas de salud que estas causan a las comunidades. No existe un mecanismo para el consentimiento libre, previo e informado o un enfoque intercultural con las comunidades afrodescendientes; por lo tanto, no existen estrategias para la reparación integral, particularmente para las mujeres cuyos derechos humanos han sido violados.
10. El caso de Furukawa Plantacions C.A., la empresa japonesa que ha operado en las zonas más pobres de las provincias de Esmeraldas y Los Ríos durante más de 50 años, ha revelado que los empleados laboran en condiciones de esclavitud, constituyendo una grave vulneración de derechos humanos. La mayoría de quienes trabajan en las plantaciones son afrodescendientes: las mujeres, los hombres, e incluso las niñas y niños se ven obligados a trabajar en condiciones precarias y deshumanizantes. Mujeres, niñas y niños extraen fibra de abacá para la exportación internacional en condiciones deplorables y arrasadoras, sin contratos, seguridad social, atención médica o vivienda adecuada. En 2019, La Defensoría del Pueblo del Ecuador publicó un informe dirigido al Estado en el cual alertó la configuración de un caso de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de escalvitud.
	1. Las autoridades tomaron medidas iniciales y suspendieron las operaciones de la empresa. Esto afectó especialmente a las mujeres, ya que están mal remuneradas y no pudieron enviar a sus hijos a la escuela o en general llegar a fin de mes, exacerbando su precaria situación económica.
11. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 se desarrollaba la audiencia de Acción de Protección por trabajadores, víctimas de esclavitud, en contra de Furukawa Plantaciones C.A. y el Estado Ecuatoriano. De los 123 demandantes, 37 de ellos son mujeres y 58 afrodescendientes. El juez Constitucional de Santo Domingo declaró que sí existe servidumbre de la gleba en las plantaciones de Furukawa así como graves violaciones de derechos humanos, incluidos a la vida digna, la salud, la libertad personal y la no discriminación.

***En tiempos de COVID-19***

1. No es sorprendente que hayan habido casos de COVID-19 en los campamentos improvisados de Furukawa para personas trabajadoras actuales y pasadas. A partir de junio de 2020, al menos dos mujeres mostraron síntomas del virus. Ni Furukawa estaba tomando las medidas necesarias para garantizar la salud y la bioseguridad de su personal y ni el Estado Ecuatoriano adhería a su obligación estatales de brindar atención de salud oportuna.En la provincia de Esmeraldas, como en todo el territorio nacional, los casos de COVID-19 están aumentando. Ante la emergencia sanitaria y el incremento sostenido de casos de COVID-19 en esa zona, la comunidad ha visto necesario organizarse para mantenerse informada sobre el virus. No hay asistencia del Estado, y se requiere adquirir suministros sanitarios para la higiene familiar, para el aprovisionamiento comunitario de productos de primera necesidad y disminuir así, el riesgo de contagio.
2. Las mujeres de esta región lideran los esfuerzos de prevención y recuperación. La población es vulnerable y la emergencia ha generado un impacto directo a la economía familiar, sobre todo de las mujeres que proporcionan muchos de los servicios y productos para el turismo comunitario de la naturaleza, que es una de las principales actividades productivas.

**Recomendaciones**

**A los Ministerios de Producción, de Agricultura y de Trabajo y a las empresas:**

* Implementar y aplicar el marco normativo en cuanto a derechos humanos y actividades extractivas y agroindustriales, adoptando medidas razonables para evitar las violaciones de derechos humanos, en particular los de las mujeres.
* Garantizar la realización de consultas previas, libres e informadas entre las comunidades, en particular a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, antes de que puedan tener lugar negociaciones con empresas internacionales.
* Establecer políticas de igualdad que cumplan con la garantía del derecho de las mujeres afroecuatorianas y las mujeres indígenas a elegir su camino de desarrollo: con un enfoque de género, cultura e identidad del cual pueden beneficiarse.
* En el caso de Furukawa Plantaciones C.A. , realizar una negociación para conseguir medios de reparación integral a los derechos de las mujeres de manera directa y efectiva.

**Al Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades:**

* Posicionar los derechos de los pueblos afroecuatorianos, en particular las mujeres afroecuatorianas, en las agendas sectoriales y territoriales y la política pública.
1. Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente. [↑](#footnote-ref-1)
2. Colaboraron en la presente sección: Cristina Cucurí (Pueblo Puruwa-Red Provincial de Organizaciones de Mujeres Kichwas de Chimborazo; Elva Ulcuango (Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente); Diocelinda Iza (Organización de Mujeres "Sembrando Esperanza" OMICSE de Cotopaxi); Nancy Simba (Comunidad La Toglla); Josefina Tunki (Pueblo Shuar Arutam - Organizaciones de Mujeres Shuar Arutam); Luisa Lozano (CONAIE); Lidia Rueda (ASFADEC); Shodona Kettle (RICS); Alba Moreira y Zoila Menéndez (Colectivo de Mujeres "La Tejedora Manabita); Irma Bautista, (Coordinadora Nacional de Mujeres Negras CONAMUNE); Adriana Sigcha y Judith Flores Chamba (Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador SIPAE); Patricia Gálvez (CEDEAL); Clara Merino (Fundación Colectivo Político Luna Creciente) Verónica Potes (Abogada); Nicole Mina, (Internacionalista); Walleska Pareja Díaz (Abogada CNME); y Michel Erazo (INREDH). [↑](#footnote-ref-2)